

FACTORES ECONÓMICOS LIMITATIVOS DE LA DEMOCRACIA Y LA PAZ: EL CASO DE GUATEMALA

Saúl OSORIO PAZ

En Guatemala (1985) se llevó a cabo por el gobierno (en representación del ejército) un proceso electoral que persigue, según la propaganda, concluir en un régimen democrático de corte burgués. Desde luego, el ejército no ha actuado solo ni en función de un proceso abstracto, las condiciones concretas de aquel país le asignan funciones que benefician en determinadas formas a los sectores dominantes, unos más, otros menos. La defensa de tales intereses y los correspondientes a la estrategia general norteamericana, completan un cuadro histórico político con resultados obviamente tangibles en la evolución de la sociedad guatemalteca. Aquí se sustenta la tesis de que las condiciones y contradicciones económicas han derivado en una situación que hacen muy difícil el que un gobierno surgido del proceso electoral, se encuentre en capacidad de otorgar las libertades públicas que caracterizan a un genuino régimen democrático, así como la política socioeconómica necesaria.

Al hacer la Corona Española el centro de la Capitanía General al territorio que hoy ocupa Guatemala, condenó a la mayoría de sus pobladores a un oprobioso destino, incluso en comparación a otras naciones de la misma región de América Central. El hecho de contar con la administración general le otorgaba cierto grado de prepotencia hacia el resto del área, que incidía también internamente. Se trataba de una administración privilegiada, nacida de privilegios. Sin repetir la historia baste recordar sus vínculos e identificaciones con los propietarios colonizadores, circunstancia que propicia las más diversas formas de corrupción y aprovechamiento con ventajas. Ello da base a costumbres, hábitos, estilos y consolida relaciones que conceptúan una vida perpetua de dominación, interpretada casi como una herencia divina. La base real de este ensueño la constituye la gran masa de población indígena que significa fuerza de trabajo explotable. Por la misma condición del país de origen, los conquistadores no aportan mayor tecnología, por lo

que el trabajo vivo se torna la cuestión clave, dentro de un ambiente histórico propicio para distintas formas de discriminación, A lo largo de siglos y dadas las sucesivas instituciones laborales coloniales, y aun ya dentro del periodo independiente, no se constituye mercado de trabajo en sentido moderno, predominando el trabajo forzado o semiforzado que niega el régimen salarial pleno, siendo hasta la década de los cuarenta que se deroga la legislación que establece el libreto de jornaleros, vestigio colonial. Los valores de uso objeto de producción se identifican con variantes de monocultivo, con procesos atrasados que inciden negativamente en la modernización rápida de las relaciones de producción, hecho que impone en un lapso considerable la reproducción mediante variantes en la renta de la tierra, y es con posterioridad que entra a funcionar la plusvalía absoluta. Estos esquemas de reproducción son proclives para el deterioro del precio de la fuerza de trabajo (cuando entra a funcionar el salario) y en la esfera internacional contribuye a determinar el intercambio desigual.

Como en toda sociedad colonial quienes ejercen la dominación se dedican al disfrute de las condiciones prevaletientes, dentro del lujo y la ostentación de la época, por lo que el proceso de acumulación resulta lento como lo atestiguan los hechos posteriores. Las circunstancias citadas solo se explican dentro de formas opresivas de gobierno que se prolongan después de la independencia. Así, se encuentra que la Colonia está presente en la mentalidad de las clases dominantes, sobre todo en la burguesía agroexportadora. Los progresos en este orden son leves y más se relacionan o combinan con la dominación neocolonial del imperialismo norteamericano. De ahí la rígida inflexibilidad de estos sectores sociales.

Después de diversos acontecimientos históricos, Guatemala quedó reducido a un poco más de 108 mil kilómetros cuadrados, tiene más de 8 millones de habitantes, con un sinnúmero de carencias sociales de las peores en América Latina. El área está habitada por una sociedad que aunque relativamente pequeña es sumamente compleja. En el aspecto económico aun siendo predominante el capitalismo, arrastra diversos rasgos precapitalistas desde la base hasta la cúpula ideológica de las clases dominantes, como se acaba de explicar. No sólo se presenta la heterogeneidad correspondiente al nivel histórico de su desarrollo, sino al mismo tiempo éste se encuadra dentro de poblaciones de distinto origen étnico y consecuentemente con diferencias culturales, que implican diferentes concepciones de los problemas de la vida que matizan las formulaciones para solventarlos. Aparte de los acontecimientos internacionales, internamente se ha gestado gran parte de la crisis económica,

social y política, de manera progresiva, que ha devenido una confrontación violenta, inclusive armada. Esta característica de la crisis guatemalteca la particulariza en referencia a otros países inmersos también en la crisis del capitalismo.

Para llamar la atención sobre la síntesis de la evolución económica, lo perminente es señalar los datos del producto interno bruto en los últimos años, que en el total se presentan así:

<i>Año</i>	<i>Tasa de crecimiento</i>
1980	3.7
1981	0.9
1982	-3.7
1983	-2.7
1984	0.4

Los sectores productivos más importantes: agrícola, manufacturero, construcción y minero, con excepción del último que muestra bruscos vaivenes, presentan tendencias declinantes, muy acentuadas en 1983. Por lo que hace a los servicios básicos, los acontecimientos se presentan correlacionados con la producción de bienes. El carácter tradicional del esquema productivo se refleja en el estancamiento o retroceso de la composición del mismo producto; de esta forma el peso de la agricultura era en 1970, 27.3% y en 1980, 27.7%, en tanto la industria manufacturera se movía entre el 15.8% y el 15.5%, en orden respectivo. Estas cifras son muy elocuentes por cuanto indican no necesariamente un crecimiento acelerado de la agricultura, sino un retroceso global dentro del cual la industria disminuye en mayor proporción respecto al producto interno bruto.

En el quinquenio 1980-1984, los productos agrícolas fundamentales (café, algodón, caña de azúcar, maíz, frijol y arroz) fluctúan o caen sensiblemente y en forma más ostensible los tres primeros, importantes como productos agrícolas de exportación.¹ En este juicio se alude precisamente a tasas reales de producción y no al valor. Extrañamente, por los precios bajos, la caña de azúcar sí mantiene un alto crecimiento. En lo atinente a la minería en general el sostén fundamental es la producción de petróleo, pues es sabido que la empresa productora y exportadora de níquel abandonó sus actividades. Pero en líneas generales la producción tiene signo negativo (-6% en 1981) o crecimiento bajo como en 1982 y 1983 (3.9 y 2.0%, respectivamente).

¹ Como resultado de la sequía del Brasil, recientemente se ha producido un alza considerable en los precios del café.

Aunque la reproducción del sistema tiende a ser adversa a partir de 1978, es desde 1980 que el fenómeno se agrava a tenor de lo que reflejan la demanda y oferta globales, así:

1980	1.9
1981	0.1
1982	-7.1
1983	-5.0
1984	1.1

Sería muy extenso comentar todos los renglones de la reproducción, pero sí es pertinente, por referirse a la acumulación, destacar los hechos concernientes a la inversión. Tanto la inversión pública como la privada se han deteriorado. La inversión pública en los años 1982, 1983 y 1984 en su orden presenta las siguientes tasas: -20.4, -32.1, -35.7; la inversión privada en el quinquenio 1980-1984, ha respondido de esta manera: -23.7, -10.5, -1.1, -23.1, 5.8 (preliminar). De este modo, en Guatemala no puede hablarse de recesión, sino de una clara depresión.

Este dramático panorama económico se ha agravado por las políticas inspiradas o impuestas por el Fondo Monetario Internacional. En forma abierta las presiones norteamericanas han estado presentes.

Por espacio de 30 años las cúpulas militares, tuvieron a su cargo la administración pública, buscando representar los intereses de las clases dominantes, suprimir la insurgencia armada y todos los movimientos populares a fin de generar, a su juicio, una más favorable situación al proceso de acumulación. Estos hechos, coinciden con ciertas diferencias no esenciales con la estrategia del gobierno norteamericano. Dentro de este marco, los sucesivos gobiernos de Guatemala han venido haciendo esfuerzos por atraer capitales privados externos, a ese fin van las modificaciones a la legislación petrolera, cuyo éxito es dudoso dada la situación del mercado de hidrocarburos a finales de 1984 y principios de 1985. El capital extranjero exhibe también precauciones en otras áreas de inversión. Un breve vistazo al pasado reciente contribuye a explicar la quiebra económica de Guatemala.

En efecto, la revolución burguesa iniciada en 1944, enfrentando condiciones del pasado colonial que se expresan en rasgos objetivos y subjetivos precapitalistas, se orienta hacia una reestructuración de la propiedad agrícola y de las relaciones económicas internacionales y, al mismo tiempo, establece lineamientos concretos en políticas y presenta hechos que persiguen un desarrollo general menos dependiente. Pero las finalidades y las medidas de política económica entran en conflicto con la

inserción del imperialismo norteamericano en el país. Pueden mencionarse a tal fin la expropiación de tierras de la United Fruit Company, el proyecto hidroeléctrico Jurún-Marinalá y la construcción de la Carretera al Atlántico. Estas políticas dieron origen a la intervención de Estados Unidos a mediados de 1954 y causaron el derrumbe del gobierno revolucionario. Para Guatemala ello tiene un significado nacional, regional e internacional.

Desde el punto de vista nacional no sólo se anulan los resultados de las políticas ejecutadas, sino que se imprime una reorientación a la asignación de recursos en beneficio de las empresas extranjeras y del alineamiento a una integración regional ubicada dentro de la *transnacionalización*, integración que poco tiempo después se sitúa explícitamente dentro de los objetivos de la Alianza para el Progreso. Internacionalmente, tanto en la economía como en lo político, se da una incondicional subordinación a Estados Unidos.

El impulso a la integración económica centroamericana es más de carácter exógeno que endógeno, aunque en lo interno se dejan satisfechos los intereses de los terratenientes en cuanto a la inafectibilidad de sus tierras, y a los intereses industriales en la ampliación horizontal del mercado (preferentemente de artículos de consumo) constituido por las capas de mayores ingresos de la región.

Los organismos represivos del Estado, por su lado, cumplen con la misión de destruir organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, populares y partidos políticos, habiendo recibido a su tiempo el entrenamiento requerido de parte de los asesores norteamericanos; esa represión general sobreestimula la resistencia de propietarios a mejorar las paupérrimas condiciones salariales.

Dentro de esta nueva etapa se sientan las bases para el mantenimiento de la estructura agraria y la dominación del imperialismo norteamericano, las leyes y reglamentos condicionan el sistema tributario de manera que corresponda a los intereses de agroexportadores y empresas industriales sobreprotegidas. La carga tributaria es baja y totalmente regresiva, oscilando los impuestos indirectos en alrededor del 83% del total de ingresos/tributarios. Aún el intento de ligeras modificaciones fiscales formulado por el gobierno en 1967, fue rotundamente rechazado por las clases dominantes. Estas y otras circunstancias de índole meramente política y la violación sistemática de los derechos humanos dan origen al movimiento armado de la década de los sesenta.

Los gobiernos iniciados en 1954 contaron con la asistencia económica y técnica de Estados Unidos y la banca internacional. Se trató lógicamente de créditos direccionales. La asistencia técnica en la práctica ha

sido un aparato interno dentro del propio Estado guatemalteco, que realmente diseñó las políticas a seguir; así, por ejemplo, en materia financiera la política de compras se ha llevado a cabo en mercados preestablecidos a precios más elevados que los correspondientes al mercado internacional. En cambio, las exportaciones en el periodo considerado han visto disminuir sus precios: en 1965 Guatemala obtiene la misma cantidad de dólares que en 1956 por el café vendido, habiendo exportado el 50% más en volumen. Pero tanto exportadores como caficultores no ven mermar sus ganancias, los primeros por su posición estratégica en la circulación y los segundos porque comprimen los salarios en una forma u otra; actualmente lo hacen impulsando la devaluación cambiaria. Las relaciones del sector agroexportador y gran parte del capital extranjero no es sólo el fruto de una coincidencia territorial y económica, sino también política, como se define por el capitalismo en referencia a la ganancia, con las particularidades alusivas a las formas de explotación.

El enfoque subjetivo de la burguesía guatemalteca que ya se mencionó, se conjuga con posterioridad a la intervención norteamericana con la herencia colonial, lo que pudiera llamarse la "herencia frutera" (consolidada a partir de principio del siglo xx), y se entrelaza el carácter altamente especulativo del sector comercial, carácter derivado de siglos de predominio. La actitud política de la burguesía hace eco a la *transnacionalización* del banano, que en resumen comprende actividades agrícolas, ferroviarias, muelleras y de comunicaciones internacionales. Este haz de vínculos económico-políticos se estrecha con la crisis en 1929 y la subsecuente dictadura "de los 14 años". Es con semejante superestructura ideológica que la burguesía local sigue encarando los problemas fundamentales de la nación.

Una vez producido el derrumbe de la revolución democrático-burguesa, que en su incipiente política de integración se proponía impulsar cierta independencia, es con la subyugación ideológica ya dicha que avanza el proceso integracionista; lo que explica los resultados a nivel local en cuanto a distribución del ingreso, ocupación, política laboral y orientación de la acumulación de capital. El proceso de integración, parcialmente iniciado en la década de los cincuenta y consolidado a principios de la década de los sesenta entra pronto en crisis; ésta se agudiza en 1969 con la salida de Honduras del Mercado Común Centroamericano. Las diversas crisis posteriores empeoran la situación hasta el estado actual. No es que aquí se adrese la necesaria integración del área, ni que se nieguen algunos de los obligados resultados, como su contribución a la formación de proletarios, pero es preciso que su

reconstitución, al ser factible, se desenvuelva sobre nuevas bases aprovechando las experiencias negativas en múltiples ocasiones señaladas. Entre esos señalamientos se encuentra la omisión deliberada de los problemas agrarios y agrícolas, así como del impulso al desarrollo de un verdadero mercado interno que, al mismo tiempo, explica la superprotección a las empresas transnacionales.

La industrialización en tal integración ha dependido del circuito que genera la exportación de productos primarios, los cuales han caído en la producción, y en otros casos en la producción y precios; se trata de una industria que dependen en el 61% de insumos importados; por ello al final de la década de los setenta viene una contradicción que aumentó considerablemente la capacidad ociosa, el desempleo, la caída de los salarios reales y la pobreza. Al privilegiar cada vez más a la burguesía agroexportadora, la crisis se traslada principalmente a los asalariados, siendo ello una causa más del estrangulamiento del mercado interno.

Las condiciones económico-sociales (crisis monetaria internacional, energética, etcétera), así como la influencia de movimientos revolucionarios y democráticos en el continente, estimulan las luchas sociales de trabajadores y estudiantes a lo largo de la década de los setenta. Cualquier espacio se busca y aprovecha para el restablecimiento de la organización del movimiento obrero y sindical, pero a la vez reaparece la lucha armada y se acentúa la represión estatal. La situación insostenible que imponen el imperialismo, la burguesía y la cúpula militar a las clases subordinadas, da lugar a confrontaciones antes no vistas en Guatemala. (Decir esto no resta méritos a otros movimientos precedentes ya dentro del periodo posterior a la intervención norteamericana de 1954.) Así, se desenvuelve la lucha económica que luego alcanza niveles políticos, una lucha de clases profunda que de momento controla las fuerzas del poder económico, sin que ello implique una superación de la crisis política cuya expresión se evidencia más con las jornadas de agosto-septiembre de 1985. Sin embargo, se hace alguna claridad si se observan algunos hechos sobre los sectores productivos fundamentales, agricultura e industria, en la década recién pasada.

Entre 1970 y 1980 la agricultura arroja un crecimiento del 4.8%, pero el comportamiento no es uniforme: de 1970 a 1975 puede hablarse de cierta expansión (6.2%); entre 1975 y 1978 desciende (3.9%); 1979 respecto de 1978, representa sólo un 3.2% y 1980 respecto de 1979 es sólo 2.5%. Es claro, pues, el deterioro en el curso de la década. Pero no sólo se da una caída que no cubre ni el crecimiento de la población, sino que, con base en el impulso *transnacionalizador* se privi-

legia la producción para exportar, lo que significa reasignar recursos, dejando cada vez más de lado la producción para el consumo interno. Por su parte, la producción para exportar no es lo suficientemente grande para resolver los problemas de ocupación en el campo, máxime si se considera que la agricultura comercial opera con una mayor densidad de capital en términos relativos. El desabastecimiento interno contribuye a generar cierto grado de inflación no conocido en la adecuación económica del guatemalteco. Así, la evolución de la agricultura tiene que ver con la crisis alimentaria que padece el país, con la deformación económica al internacionalizarse cada vez más el capital-mercancía y con el intercambio desigual. La vulnerabilidad agrícola en general obliga en muchas ocasiones a importar alimentos.

La industria, a su vez, pareciera no encarar rasgos deprimentes en la década recién pasada. Comparando años extremos (1970-1980) la tasa de crecimiento es del 6.3%; aun entre 1979 y 1980 se mantiene la misma tasa. Con todo, subyacen factores que corroen su evolución:

Desde la primera mitad de los años setenta la industria manufacturera venía dando muestra de debilidad. Tres factores principales podrían explicar la situación: el debilitamiento de la demanda interna y regional agravada por las dificultades financieras —falta de divisas— que gradualmente han obstaculizado el comercio intrarregional; y el ya comentado agotamiento del actual proceso de sustitución de importaciones, y las dificultades enfrentadas por muchas empresas, tanto financieras como para la importación de insumos a causa de las estrecheces de liquidez internacional por la que atraviesan los países.²

Así, los hechos concretos sobre los sectores más importantes de la producción real determinados por la industria y la agricultura, contribuyen poderosamente a la caótica depresión que en el último trimestre de 1985 presenta la economía guatemalteca. Pero con respecto al abrupto estrangulamiento cabe mencionar, además de los factores recién citados, las causas estructurales básicas, que aluden a la tenencia de la tierra, la distribución del ingreso, el componente tributario, la naturaleza de la producción exportable.

En efecto, en 1979 —según el censo— las microfincas y las fincas subfamiliares constituían el 88.12 de las unidades censadas y poseían el 16.24%; al otro extremo el 2.47%, calificadas como multifamiliares grandes y medianas, tienen el 65.09% de la extensión. La incidencia de

² Caballeros, Rómulo, *La crisis económica de Centroamérica (Génesis de características sobresalientes)*, X Congreso Centroamericano de Arquitectos, Guatemala, 26 de noviembre de 1984.

esta relación es obviamente grave. La existencia de una gran cantidad de poseedores con incapacidad de autosostenimiento erosiona las relaciones laborales porque permite la depreciación de la fuerza de trabajo en un país en que predomina la población campesina; la misma reproducción de la fuerza de trabajo queda parcialmente a cargo de quien vende dicha mercancía, en cierto modo desestimulándose, así, las exigencias de la acumulación de capital (V en especial).

La no *proletarización* plena tiene así que ver, aunque sea de manera indirecta, con la liberación de recursos de propietarios para el consumo suntuario o la fuga de capitales. Por el lado de la oferta de fuerza de trabajo se mantiene, de esta manera, una cantidad disponible que presiona sobre el salario de todos los trabajadores del sector, propagándose por esta razón los bajos niveles de vida. Como estas condiciones de explotación no exigen mucho capital aunque la productividad por hambre sea alta, en relación con la tierra resulta disminuida y, en general, resulta baja pudiendo ser más elevada. La capacidad de compra de esta gran masa es escasa, por lo que constituye un segmento que relativamente es débil al estímulo y crecimiento del mercado interior y que tiene un impacto adverso al crecimiento y modalidades del sector industrial. Al afectar la dimensión del sector industrial se afecta su estructura, aquí interesa en especial el componente $C + V$, así como la evolución de C a su propio interior, que es precisamente la falla estructural del modelo de sustitución de importaciones. En este contexto la gran propiedad a nivel global complementa las relaciones básicas, habiéndose caracterizado de manera general durante un largo periodo por extensiones poco cultivadas de baja productividad-tierra; no obstante ello, este pequeño grupo de propietarios genera todavía las formas básicas de poder.

Posteriormente se emprende cierta modernización en grandes fincas, siguiendo el modelo de capitalización de latifundios, que por su propia naturaleza exige una forma política represiva. Aquí se muestra que en el mediano y largo plazos el modelo económico determina en forma predominante el modelo político. Esta modernización agrícola se da paralelamente al desarrollismo industrial más o menos a partir de la década de los cincuenta, estando este último asociado y subordinado al capital transnacional. Al principio la revinculación al imperialismo se da por la vía comercial. El gran terrateniente clásico se entrelaza al imperialismo mediante las antiguas concesiones, a cambio del respaldo político, diplomático y militar. En los últimos tiempos predominan la asistencia técnica, financiera y militar, que redondean la forma neocolonial. Así, las condiciones estructurales y políticas redefinen las pautas eco-

nómicas con pocos avances en la actividad productiva desde el punto de vista cualitativo y con un retroceso en el aspecto político.

En correspondencia a la concentración de la propiedad, que se da también en los cuentahabientes bancarios, el conjunto de relaciones entre las que se destacan la política laboral y la poderosa influencia de las transnacionales, determina en el decenio de los setenta, una estructura del ingreso en la que el estado de pobreza comprende al 79% de la población y la extrema pobreza sobrepasa al 52%. Al mismo tiempo, los cálculos señalan que el 10% más rico concentra el 40% del mencionado ingreso. En la década de los ochenta por causa de la profundización de la crisis, al menos teóricamente es predecible que la distribución del ingreso haya empeorado. La miseria de la población en general ha aumentado, habiendo contribuido a ello la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional al encarecer los servicios públicos así como la devaluación del quetzal. Estas pautas distributivas a nivel nacional contribuyen también al receso o depresión del sector industrial, teniendo los mismos efectos estructurales en el aparato productivo que la forma de tenencia de la tierra, por lo que hace innecesario repetirlos. Con todo, en particular es evidente que tanto una como otra estructuras dan lugar a la acentuada fuga de capitales, sin cuyo control es absurdo hablar de reactivación económica dentro del cuadro económico vigente. La fuga de capitales particulares alude al mismo tiempo a la instancia nacional, ocasionando retroceso en la producción y en la productividad; en cuanto a ésta más de lo imaginado si se tiene presente el continuar de la misma en otras latitudes. Puede afirmarse sin equívoco que la actual distribución del ingreso por varias vías da pie a la especulación contra el quetzal, no sólo por la fuga de capitales estimulada por Estados Unidos, sino además por aquellos montos introducidos en el circuito de comercio cambiario.

Tampoco hay que perder de vista que, aun en medio de la crisis, continúa el consumismo introducido por las transnacionales, el comercio internacional y el estilo imitativo de vida de las clases dominantes, prosiguiendo de este modo, la dilapidación de recursos invertibles. En todo caso es notorio que la iniciativa privada ha sido incapaz de manejar al aparato productivo de forma que en alguna manera pueda responder a las necesidades de la población. El ciego afán de aprobación y de dominación correlativo, corroboran un estilo político despótico. Las contradicciones ejército-burguesía no son fundamentales en referencia al modo de obtener y distribuir el producto creado.

Pero no sólo las dos estructuras mencionadas inciden en el destino de la sociedad guatemalteca; mucho habría que decir de la estructura

tributaria. La carga tributaria sólo entre 1982 y 1984 descendió casi 2 puntos porcentuales, bajando de 7.2% en aquel año a 5.3% en éste. Los ingresos tributarios en Guatemala, en un 83%, provienen de impuestos indirectos, o sea que se trata de un sistema regresivo, poco elástico en consecuencia. De ahí que el Estado se autorrestringa en cuanto a inversiones con recursos propios, por lo que se ha tenido que acudir al endeudamiento externo no sólo para cubrir proyectos de inversión, sino inclusive para gastos de funcionamiento. O sea, que la política tributaria no sólo ha sido tradicionalmente injusta, sino además proclive a generar la dependencia financiera. Por la formulación de tal política, el Estado ha carecido de autonomía relativa, pues en este asunto ha sido decisiva la acción de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (CACIF), en la que predomina el sector agroexportador, que presenta una resistencia crónica a pagar más impuestos, desde luego con el beneplácito de los otros sectores capitalistas. Esta política ha sido también restrictiva del mercado interior y estimula la fuga de capitales.

Sin entrar en mayores detalles en cuanto al sector externo, obsérvese nada más la composición de las exportaciones en su estructura porcentual:

Exportaciones FOB;	100.0%	1984
Café	31.1	
Cardamomo	8.5	
Azúcar	6.2	
Algodón	6.3	
Banano	4.8	
Petróleo	3.0	
Carne	1.1	
Otros productos	12.5	
Exportaciones al MCCA	26.3	

FUENTE: Centro de Investigación Económica Centroamérica, *Informe 1984, persuasivas 1985*.

Se trata obviamente de una estructura de productos exportables de carácter primario, en lo fundamental, hecho tradicional que hace vulnerable la economía. Lo normal es que tratándose de productos de saturación unos, su consumo crezca en menor proporción que la renta en los países industrializados; otros, el algodón y el cardamomo son

materias primas que pueden tener mejores condiciones de elasticidad en la expansión y peores en la contracción. De todas formas están sujetos en los centros industriales y políticos que profundizan el intercambio desigual. El comercio con el resto de países centroamericanos ha disminuido por la consabida crisis del área, tratándose de productos de industria liviana. El propalado dinamismo que puede arrancar esta estructura comercial es plenamente deleznable y, por ello mismo, es difícil recuperar la capacidad de pago, relativa a la necesidad de importaciones y a las cargas concurrentes del endeudamiento externo. Hoy se ve al país debatirse en una depresión peor que la de 1929.

En suma, las estructuras agraria, de ingreso, tributaria y de exportaciones —para no mencionar otras—, conspiran hacia la depresión, la fuga de capitales y consecuentemente hacia la miseria de la población, sin que las distintas fracciones del capital tengan algún proyecto que pueda atenuar la fase depresiva.

El jefe del Estado de Guatemala, general Oscar Mejía, inspirado por el ministro de Finanzas, licenciado Armando González Campo, sostiene que la crisis es causada por el déficit fiscal, y dice.

Si el déficit fiscal es la principal causa de nuestros problemas de divisas, y del alza de los precios, estimo que el diálogo nacional debe enfocarse, principalmente, hacia él y analizar las opciones para neutralizarlo, o reducirlo al mínimo, en que ya no represente una fuerte inestabilidad socioeconómica . . . debemos ser claros en el diálogo, ese diálogo u otro que se deberían orientar a la búsqueda de opciones para corregir el déficit fiscal, causa principal de la inestabilidad económica y cambiaría actual, como un prerrequisito para la reactivación económica.³

El propio ministro de finanzas, en relación con el déficit informa que

El mismo se multiplicó 17 veces entre 1977 y 1981, de Q 39 a Q 638 (Q=Dlls. oficialmente) millones, cifra esta última, similar al monto de ingresos tributarios de ese año . . . Además, como la práctica financiera de los años 1978-1981 se orientó a la utilización del crédito del Banco de Guatemala, la deuda del gobierno se disparó pasando de Q 987 millones en 1978, a Q 2,158 millones al cierre de 1981; de esta deuda unos dos tercios constituyen deuda interna. . .⁴

Párrafos antes, el ministro ha dicho: "Ello coincidió con una acmi-

³ Desplegados en la prensa guatemalteca.

⁴ *Ibidem*.

nistración que perdió toda noción de prudencia financiera y probidad en el uso de fondos públicos."⁵ Con todo y lo grave que son los datos del déficit fiscal, éste no es más que una expresión de la crisis cíclica y estructural —fundamentalmente y de la fuga de capitales—. La fuga de capitales sobrepasa el déficit fiscal, ya que se aproxima a los 2,500 millones de dólares. De forma que resulta engañoso presentar las cifras de la deuda pública acumulada como causa decisiva de la crisis. En todo caso, el hecho sí constituye una herencia negativa al gobierno civil.

En resumidas cuentas, la instalación de un gobierno derivado de la intervención norteamericana (1954) consolida estructuras inelásticas en referencia al crecimiento económico, que una vez manifestada la crisis del capitalismo en general, profundiza dicha crisis en el país. La década de los setenta presenta una sintomatología clara de estrangulamiento, en especial en el área agrícola, pero con la ampliación de la crisis en el ámbito del mercado común, colapsa también el sector industrial, hecho agravado por la dependencia estructural de este último sector. A finales de la década, con el basto incremento de la corrupción, se agiganta el déficit fiscal, dando origen a una crisis financiera evidente. Dentro de este cuadro económico general resurgen los movimientos populares (estando presente en la región occidental el movimiento armado), que amenazan con robustecerse en el curso de 1986, en un momento en que la crisis no ha tocado fondo. Todo indica que no existen proyectos para atenuar la depresión, de ahí que en el marco general no existan condiciones económicas para la democratización, que supone una mínima superación de las condiciones económico-sociales de la población y libertades suficientes para perfilar las luchas reivindicativas. Si algún espacio pudiera abrirse a partir de 1986 tendría que provenir del poder logrado por las fuerzas sociales y políticas, como producto de diversas formas de lucha que pudieran, también, minimizar los errores cometidos a finales de la década pasada, siempre y cuando en este aspecto se tenga una dirección acertada.

Las características internas de la sociedad guatemalteca hasta ahora señaladas propenden hacia situaciones convulsivas, que entrañan inestabilidad e inseguridad de todo orden. Éstas se traducen hacia el exterior del país.

No obstante, con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo, el 14 de enero último, se dio lugar a una serie de acontecimientos políticos que sugieren intenciones pacifistas de parte del nuevo régimen, sobre todo tratándose de

⁵ *Ibidem.*

los asuntos relacionados con la intervención de Estados Unidos en la región centroamericana, que tiene como objetivo derrocar al gobierno de Nicaragua.

A nivel interno ha continuado el proceso represivo mediante asesinatos y desapariciones, y el gobierno asegura que trata de controlar los escuadrones de la muerte, propósito que espera lograr en un año aproximadamente. En todo caso, de continuar la violación de los derechos humanos al interior del país se tendría un elemento de perturbación en contra de la democracia y de la paz en América Central.